



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Dictamen

Número:

Referencia: Decreto 202/17. EX-2025-80548237- -APN-OA#MJ. Ministerio de Capital Humano comunica DJI de Correo Oficial de la República Argentina S.A. presentada en Licitación Privada por vínculo de amistad de directora con el Presidente de la Nación (SISA 23285)

Señora Directora de Planificación de Políticas de Transparencia:

Por las actuaciones de referencia tramita una comunicación de la Coordinación de Compras y Contrataciones de Educación del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO (MCH), mediante la cual se informa la recepción de una Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/2017 (DJI) presentada por CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. (CORASA), donde se declara un vínculo de amistad entre una directora de dicha empresa, Gladys Noemi HUMENUK, con el Presidente de la Nación.

I. Antecedentes

I.a) El expediente se inició a partir de la recepción de la nota NO-2025-80238133-APN-CCYCE#MCH (agregada al orden #03), donde se comunica que CORASA presentó una DJI con vínculo positivo “[...] *en el marco del proceso de compra N° 82-0007-LPR25 que tramita por EX-2025-62696927- -APN-CCYCE#MCH y cuyo objeto es la contratación del servicio de distribución y repliegue de materiales utilizados para la efectiva implementación del Estudio Regional Comparativo y Explicativo 2025 (ERCE).*”

Según se expresa en la nota recibida, CORASA “[...] *manifiesta vínculo positivo entre la Directora de dicha sociedad (Gladys Noemi Humenuk) y el Sr. Presidente de la Nación*”. Además, adjunto a la nota se acompaña como archivo embebido el documento CE-2025-76366990-APN-DPPT#OA -correspondiente a la respectiva DJI, generada vía TAD conforme formulario aprobado por la Resol. OA 4/2023 (modificatoria de la Resol. OA 11-E/2017)-, donde en la sección de identificación del “Declarante” (Persona humana o jurídica interesada en el procedimiento) se consigna lo siguiente:

- Tipo de persona declarante: Persona Jurídica
- Razón Social (persona jurídica): Correo Oficial de la República Argentina SA

- CUIT/NIT: 30708574836

Y en la sección prevista para identificar el vínculo correspondiente, se consignó:

- ¿Qué cargo desempeña el funcionario/a con quien se posee el vínculo?: A - Presidente/a de la Nación
- Nombre/s del funcionario/a: JAVIER GERARDO
- Apellido/s del funcionario/a: MILEI
- Persona vinculada con el Funcionario/a: Director/a
- Detalle Nombre y Apellido de Director/a: GLADYS NOEMI HUMENUK
- Detalle CUIT/CUIL de Director/a: 27231385776
- Tipo de vínculo con el funcionario/a: Amistad pública

I.b) Cabe mencionar que la comunicación recibida no contiene ninguna mención a la publicidad total de las actuaciones, según lo previsto en el artículo 4º inciso b) del Decreto 202/2017, que textualmente prescribe: *“Cuando de la “Declaración Jurada de Intereses” formulada surgiera la existencia de alguno de los supuestos previstos en los artículos 1º y 2º, el organismo o entidad en cuyo ámbito se desarrolle el respectivo procedimiento deberá aplicar los siguientes trámites y procedimientos: [...] Arbitrar los medios necesarios para dar publicidad total a las actuaciones en su página web y en la de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, de acuerdo con las reglas y excepciones previstas en materia de acceso a la información pública, debiendo en su caso dar intervención o solicitar colaboración al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN [actual SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA] a los fines mencionados.”*

Debe recordarse que la comunicación del enlace web a la publicación de las actuaciones por parte del organismo a cargo del procedimiento -en este caso, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO-, resulta imprescindible para que la OA también pueda brindarles publicidad en la correspondiente sección de su sitio web institucional.

Al respecto, a fin de constatar si el expediente se hallaba publicado en el sitio web institucional del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO o de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, se procedió a explorar diferentes secciones de sus respectivos sitios, ubicándose en la sección de Compras y Contrataciones del primero (<https://www.argentina.gob.ar/capital-humano/compras-y-contrataciones>) un enlace al Portal del Sistema de Contrataciones Electrónicas de la Administración Pública Nacional “Comprar.gob.ar”, donde fue posible ubicar información sobre el proceso de mención en el siguiente enlace:

<https://comprar.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhwZn0hYK0t|a4F1wHCQ1gmb3SYvszFqdxM6nm7D6tZiEzxAJl79ZaxFRnTXIyaQXYBJsJ4nN/MXdq7vYH583CFjPZBBJc9NQnkgrJZUqmdVzA=>

No se halló ningún enlace -ni en el sitio del Ministerio, ni en el de la Secretaría de mención- donde se diera publicidad total de las actuaciones en los términos exigidos por el ya citado artículo 4º inciso b) del Decreto 202/2017.

En virtud de lo expuesto, se sugiere recordar a las autoridades del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, por un lado, que deben publicar en el sitio web institucional la totalidad de los documentos que integran el expediente en cuestión; y por otro, que deben comunicar dicho enlace a esta Oficina, tanto en este caso, como en futuras comunicaciones de DJI positivas.

I.c.) No obstante lo señalado, esta Oficina accedió al citado expediente EX-2025-62696927- -APN-CCYCE#MCH a través del sistema GDE, donde obra la información relativa a los términos y condiciones de la contratación, entre la que se destaca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuya Cláusula XII, inciso A) apartado “7” prescribe: *“DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES: De conformidad con el artículo 1° del Decreto N° 202/17, el oferente debe presentar una “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite [...]”*. (PLIEG-2025-65928912-APN-CCYCE#MCH, obrante en el orden #13).

Allí también se informa: *“A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2° del Decreto N° 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.*

- SECRETARIO DE EDUCACIÓN Dr. Carlos Horacio TORRENDELL (D.N.I. N° 21.477.497);

- MINISTRA DE CAPITAL HUMANO Lic. Sandra Viviana PETTOVELLO (D.N.I. N° 20.186.033).”

La convocatoria a la referida Licitación Privada fue autorizada por la Sra. Subsecretaria de Gestión Administrativa de Educación, quien también aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y autorizó el gasto correspondiente (Disposición DI-2025-114-APN-SSGAE#MCH). Al respecto, cabe observar que el monto de la contratación es inferior a los 3.000 módulos previstos en la reglamentación como límite para la aprobación o adjudicación por parte de un funcionario con rango de Director Nacional o Director General o funcionario de nivel equivalente y también inferior a los 15.000 módulos previstos en dicha reglamentación como límite para que lo haga un Subsecretario o funcionario de nivel equivalente (conforme la planilla anexa al artículo 9° del Decreto 1030/2016, sus modificatorios y concordantes). Por lo que es posible que existan otros funcionarios de rango inferior a ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante, en los términos del artículo 2° del Decreto 202/17, no informados a los interesados.

I.d.) Por su parte, de la lectura de las actuaciones no surge que, luego de la apertura de las ofertas y la recepción de la DJI de CORASA, se haya librado la comunicación a la SIGEN requerida por el artículo 4° inciso a) del Decreto 202/2017. No obstante ello, tampoco se halló en dicho expediente la comunicación a la OA (NO-2025-80238133-APN-CCYCE#MCH), sin perjuicio de que efectivamente fue recibida por esta Oficina.

I.e.) Finalmente se señala que no obran constancias sobre la implementación de un mecanismo adicional de transparencia e integridad, de conformidad a lo previsto en el artículo 4° inciso c) del Decreto 202/2017, por lo que se sugiere recomendar que se proceda a adoptar de manera fundada alguno de ellos y se comunique dicha circunstancia a esta Oficina.

II. Marco Normativo

Conforme el Decreto 202/2017 compete a la Oficina Anticorrupción tomar intervención en los procedimientos

comprendidos en dicho régimen (artículo 4°) y examinar en todos los casos en que deba tomar intervención las posibles violaciones a la Ley 25.188 y sus normas complementarias (artículo 5°).

La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública regula los conflictos de intereses en su Capítulo V. Allí se describen situaciones concretas y objetivas en las que se presume –sin admitir prueba en contrario- la existencia de un riesgo para la imparcialidad de los funcionarios. Al respecto, el Decreto 202/2017 permite prevenir y gestionar las siguientes hipótesis de conflictos de intereses, por parte de los funcionarios públicos que intervienen actual o potencialmente en los trámites en los que se presentan tales declaraciones juradas:

- La prohibición de prestar servicios a una proveedor o potencial proveedor del organismo, sobre el que el funcionario tiene atribuciones (artículo 13 inciso a de la Ley 25.188).
- La prohibición de proveer por sí o por terceros al organismo donde se cumplen funciones (artículo 13 inciso b de la Ley 25.188).
- El deber de abstenerse de intervenir en situaciones en las que se configure una causa de excusación de las previstas en la legislación procesal civil (artículo 2° inciso i de la Ley 25.188 y 17 y 30 del CPCCN)
- El deber de abstenerse de intervenir en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvieron vinculados en los últimos TRES (3) años (artículo 15 inciso b de la Ley 25.188).
- El deber de abstenerse de intervenir en cuestiones particularmente relacionadas con las entidades en las cuales tengan participación societaria (artículo 15 inciso b in fine de la Ley 25.188).

La vulneración de estas prohibiciones constituye una falta ética que puede acarrear la sanción -e incluso la remoción- del funcionario responsable. Asimismo, los actos emitidos en conflicto de intereses serán nulos de nulidad absoluta y tanto el funcionario actuante como las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que esos actos le ocasionen al Estado (conf. artículos 3° y 17 de la Ley 25.188).

En el caso no se presentaría ninguna de las hipótesis planteadas, ya que no está previsto que el señor Presidente de la Nación deba intervenir en la contratación, ni aún por vía recursiva, la que se agota con la intervención ministerial (conf. artículo 90 del Decreto 1759/72 t.o. 2017). Razón por la cual, en principio, no cabe formular ninguna recomendación al respecto.

Por su parte, el aparente conflicto de intereses que podría configurarse en atención al vínculo de la señora Directora de CORASA con el señor Presidente de la Nación, se encuentra en proceso de ser debidamente gestionado a través de las medidas de transparencia e integridad previstas en el Decreto 202/2017.

III. Análisis de cumplimiento del Decreto 202/2017

III.a) Preliminarmente cabe aclarar que si bien el vínculo declarado se encuentra comprendido dentro del supuesto previsto por el artículo 1° inciso f) del Decreto 202/2017, en tanto se trata de una relación de amistad entre la directora de una sociedad oferente y el titular del Poder Ejecutivo Nacional, la circunstancia de que la empresa en cuestión pertenezca mayoritariamente al Estado, confiere ciertas particularidades a la situación.

En tal sentido, esta Oficina ha expresado que tratándose de funcionarios públicos que ocupan cargos en directorios de

empresas cuyo capital societario pertenece al Estado, ello no importa ejercer una función contraria a los intereses de la Administración Pública en aras de un interés particular, sino todo lo contrario: implica representar al Estado en sus propios intereses. Por lo que *a priori* la situación declarada no podría configurar un conflicto de intereses en los términos de la Ley 25.188.

No obstante lo expresado, es correcta la presentación de la DJI, a tenor de lo dispuesto por la Comunicación ONC N° 6/2020 - Circular OA-DPPT N° 3/2022 (B.O. 02/09/2022), en la que se establecen los “lineamientos para la exigencia y presentación de la Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/2017 en procesos de contratación interadministrativa”. Allí se dispuso que *“en los procesos de contratación directa interadministrativa encuadrados en el artículo 25 inciso d) apartados 8 y 9 del Decreto 1023/2001, no resulta exigible la presentación de la Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/2017”*. Sin embargo, *“toda jurisdicción o entidad del Estado Nacional, organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresa o sociedad en la que el Estado Nacional tenga participación mayoritaria o universidad nacional que se presente como oferente en un procedimiento de selección diferente a los encuadrados en el artículo 25 inciso d) apartados 8 y 9 del Decreto 1023/2001 debe presentar la ‘Declaración Jurada de Intereses’ del Decreto 202/2017”*.

En suma, si bien la Directora de CORASA, empresa con participación estatal mayoritaria, representa un interés estatal y no privado, resulta exigible la presentación de la DJI del Decreto 202/2017 y la aplicación de los trámites y procedimientos previstos en el artículo 4° de dicho Decreto (conf. puntos 3 y 4 de la Comunicación ONC N° 6/2020 - Circular OA-DPPT N° 3/2022), a efectos de preservar el principio de igualdad entre los oferentes.

III.b) En segundo término corresponde señalar que -como se anticipó en el apartado I.c.-, de los antecedentes de la contratación bajo análisis surge que podría haber funcionarios de rango inferior a ministro con capacidad para decidir sobre el proceso en cuestión que no habrían sido identificados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a fin de posibilitar que los oferentes declaren la existencia de vínculos con tales personas.

En efecto, el gasto autorizado es inferior a los 3.000 módulos previstos en la planilla anexa al artículo 9° del Decreto 1030/2016 (modif. y ccdtes.), por lo que la aprobación o adjudicación del contrato podría ser realizada por un funcionario con rango de Director Nacional o Director General o funcionario de nivel equivalente, así como también, con rango de Subsecretario o funcionario de nivel equivalente.

Por tal motivo se sugiere hacer saber a la unidad contratante que, de existir otras autoridades con capacidad para decidir sobre el proceso en cuestión no informadas en la Cláusula XII, inciso A), punto 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del proceso de mención (PLIEG-2025-65928912-APN-CCYCE#MCH), deben notificarse a los interesados a efectos de que presenten una nueva declaración jurada de intereses en la que consignen, de corresponder, los vínculos que posean con las mismas, de conformidad a lo establecido en el artículo 2° del Decreto 202/2017.

III.c) En relación con el requisito establecido en el artículo 4° inciso b) del Decreto 202/2017, cabe señalar que la remisión al Portal del Sistema de Contrataciones Electrónicas de la Administración Pública Nacional “Compr.Ar” resulta insuficiente para tenerlo por cumplido.

En este sentido, se ha señalado que en los procedimientos en los que se ha declarado un vínculo de interés: *“La autoridad contratante/interviniente deberá arbitrar los medios para dar publicidad total a las actuaciones en su página web y en la de la Oficina Anticorrupción. Teniendo en cuenta que la publicidad es una ...medida preventiva para disuadir la venalidad de la función pública, se eleva el estándar de transparencia previsto en los Decretos*

1023/01 y 1030/16, permitiendo al ciudadano acceder en forma centralizada y rápida a los expedientes de las contrataciones, sin necesidad de invocar interés alguno para su consulta [...]” (“Ética pública y conflictos de intereses: estudio para su prevención y su adecuada gestión, 1a ed. Ministerio de Justicia / Oficina Anticorrupción, 2019, p. 156).

“Esta obligación no implica simplemente publicar lo actuado en el expediente hasta el momento en que se comunicó la Declaración Jurada de Intereses a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN, lo que en general ocurrirá en una etapa inicial del procedimiento de contratación. Por el contrario, dicha publicación debe mantenerse actualizada, pues una adecuada gestión del conflicto de intereses real o aparente requiere que la ciudadanía pueda conocer -y así controlar- si han intervenido personas que debían abstenerse o si las decisiones adoptadas en el proceso resultan demostrativas de parcialidad o favoritismo. A su vez, la publicidad debe hacerse de manera integral, sencilla, visible y debe resultar de fácil y rápido acceso a la ciudadanía. [...]” (op.cit. p. 157).

Si bien es cierto que el sistema “Compr.Ar” le permite a la ciudadanía acceder a la documentación más relevante de la contratación, esta difusión no puede asimilarse a la requerida por el Decreto 202/2017.

En efecto, la referida plataforma sólo brinda acceso a determinadas instancias del trámite y el control de la gestión de conflictos de intereses exige la publicidad de la totalidad de las actuaciones, tanto en la página web del organismo contratante como en la de la OA, circunstancia que permite constatar la intervención de los organismos de contralor, la adopción de los mecanismos de integridad previstos en el artículo 4° inciso c) del Decreto y -de corresponder- la efectiva abstención del funcionario con capacidad para decidir.

En virtud de lo expuesto resulta necesario que el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO y/o la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN pongan a disposición el expediente administrativo completo, con todas sus intervenciones, en su página web; y que lo hagan mediante un enlace asociado específicamente al expediente en el que tramita la licitación bajo análisis, manteniendo actualizados los movimientos correspondientes. Luego, que se informe dicho enlace a la OA a fin de que también se dé publicidad a las actuaciones en la página web de este organismo, conforme lo exige la norma en cuestión.

III.d) A continuación se expone un cuadro que resume lo observado sobre el procedimiento analizado.

REQUISITOS		OBSERVACIONES
a) Presentación de DJI por parte de los particulares (Arts. 1° y 2°)	✓	Los oferentes presentaron su DJI por el formulario digital vigente vía TAD, conforme lo establecido por la Resol. OA E-11/17 (modif. Resol. OA 4/23).
b) Requerimiento de DJI por parte del organismo (Art. 3°)	!	Del Pliego de Bases y Condiciones Particulares surge que se requirió la presentación de la DJI, aunque es posible que existan autoridades con rango inferior a ministro competentes para decidir no informadas en dicho documento.
c) Comunicación a la OA y a la SIGEN (Art. 4° inc. a)	!	Mediante la nota del orden #03 se comunicó a la OA la DJI, pero no surge de las actuaciones que se haya notificado a la SIGEN.

d) Publicidad total de las actuaciones (Art. 4° inc. b)	!	La publicación del expediente se efectuó en la sección de Compras y Contrataciones del sitio web del MCH, mediante un enlace general al Portal Comprar.gob.ar. Debe subirse el expediente completo.
e) Adopción de mecanismo adicional (Art. 4° inc. c)	!	Mediante la nota de comunicación a esta OA, obrante en el orden #03 no se informó sobre la adopción de un mecanismo adicional de transparencia e integridad previsto en el inciso c) del artículo 4 del Decreto 202/2017.

IV. Conclusiones y recomendaciones

En virtud de lo expuesto, cabe concluir que en el procedimiento analizado se han cumplido parcialmente las previsiones establecidas en el Decreto 202/2017.

En atención a las observaciones formuladas en los apartados precedentes, se sugiere remitir una nota a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, a fin de que, por intermedio de las áreas correspondientes, se atiendan las siguientes indicaciones:

1. Acreditar que se haya comunicado a la SIGEN la recepción de la DJI CE-2025-76366990-APN-DPPT#OA.
 2. Dar publicidad a la totalidad de las actuaciones en el sitio web institucional del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO y/o de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y mantener actualizado dicho enlace conforme el avance del procedimiento de contratación.
- Asimismo, informar a la OA el cumplimiento de esta indicación, con copia del correspondiente enlace web, a los efectos de su publicación en el sitio de Internet de esta Oficina.
3. Informar a la OA sobre la adopción de uno de los mecanismos adicionales de transparencia e integridad previstos en el artículo 4° inciso c) del Decreto 202/2017.
 4. De existir otros funcionarios de jerarquía inferior a ministro con competencia para decidir sobre la contratación conforme el artículo 2° del Decreto 202/17 (concretamente para adjudicar) no incluidos en la cláusula XII, inciso A) punto 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, notificar a los interesados a efectos de que presenten una nueva declaración jurada en la que consignen, de corresponder, los vínculos de interés que posean con los mismos, en los términos del artículo 2° del Decreto 202/2017.

A tales efectos, se eleva nota a revisión por el sistema GDE, para su firma, en caso de compartir los criterios expuestos.

